

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 50
O R D I N A R I A
MARTES 12 DE MAYO DE 2015

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del martes doce de mayo de dos mil quince, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

Los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Ramón Cossío Díaz no asistieron a la sesión, el primero por desempeñar una comisión de carácter oficial y el segundo por licencia concedida por el Tribunal Pleno.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cuarenta y nueve ordinaria, celebrada el lunes once de mayo del año en curso.

Por unanimidad de nueve votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el martes doce de mayo de dos mil quince:

I. 33/2013

Acción de inconstitucionalidad 33/2013, promovida por la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez del artículo 9, fracción V, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el cuatro de octubre de dos mil trece. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 9, fracción V, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cuatro de octubre de dos mil trece. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo realizó la presentación del asunto. Indicó que el artículo 9, fracción V, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila se impugnó en cuanto a la procedencia de la acción de extinción de dominio cuando se acredite el delito de facilitación delictiva, previsto en el artículo 280 Bis del Código Penal de la entidad. Propuso someter a la valoración

del Tribunal Pleno los considerandos procesales del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno a los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.

El señor Ministro Medina Mora I. sugirió citar, en el considerando relativo a la oportunidad, los artículos 2 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como fundamentos para estimar inhábil el domingo tres de noviembre de dos mil trece.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo aceptó la sugerencia realizada.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo (modificado), tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo realizó la presentación del considerando quinto, relativo a la competencia de la Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza para legislar sobre extinción de dominio. El proyecto propone concluir que dicha legislatura tiene competencia para legislar sobre el tema, a partir de las consideraciones emitidas por mayoría de siete votos del Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 18/2010, en el sentido de que, por disposición expresa del artículo 124 constitucional, rige la competencia residual a los Estados en lo que no esté expresamente conferido a la Federación; en ese sentido, los artículos 22 y 73 constitucionales no otorgan al Congreso de la Unión la facultad expresa para legislar en materia de extinción de dominio y, si bien el artículo 73, fracción XXI, constitucional le confiere una facultad expresa en materia de delincuencia organizada, este Tribunal Pleno ya sostuvo por votación mayoritaria que esa facultad debe entenderse restringida a ese delito, no en un sentido amplio que incluya a la extinción de dominio como una figura propia de la delincuencia organizada, por lo que dicha extinción no constituye una materia específica y, por ende, no concede a la Federación la facultad expresa para legislar en materia de extinción de dominio. Recordó que fue uno de los señores Ministros que integraron la minoría en la acción de inconstitucionalidad 18/2010 porque, desde su perspectiva, las Legislaturas locales no tienen facultad para legislar en materia de extinción de dominio, en virtud de que el concepto de

delincuencia organizada contenido en el artículo 73, fracción XXI, constitucional no se reduce a la descripción típica del delito de delincuencia organizada, sino que se refiere a un fenómeno general en el cual se puede encuadrar la figura de la extinción de dominio, por lo que no compartió el proyecto que recoge la postura mayoritaria de ese precedente.

El señor Ministro Silva Meza se apartó de este considerando al estimar que el Congreso estatal no cuenta con facultades para legislar en materia de extinción de dominio, como se analizó en el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, concordando con el señor Ministro Pardo Rebolledo en que del proceso legislativo de reforma al artículo 22 constitucional se advierte la intención de combatir el fenómeno de la delincuencia organizada, crimen organizado y remisiones delictivas, identificándose a la extinción de dominio en ese contexto criminal, con el fin disminuir las ganancias económicas de la delincuencia organizada.

El señor Ministro Medina Mora I. no compartió el sentido ni las consideraciones del proyecto, coincidiendo con los señores Ministros Pardo Rebolledo y Silva Meza, pues las Legislaturas locales no se encuentran facultadas para legislar en materia de extinción de dominio, entendida como la pérdida de derechos sobre bienes relacionados con un hecho ilícito de la delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas, los cuales se aplicarán a favor del Estado sin contraprestación o

compensación alguna para su dueño o quien se ostente o comporte como tal, ya que del procedimiento de reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, por el cual se incorporó la figura de extinción de dominio, se advierte que la intención del Constituyente fue introducir un régimen de excepción para combatir eficazmente la delincuencia organizada, con el objetivo de coadyuvar a desmembrar las organizaciones delictivas, limitar sus efectos nocivos, impedir su reproducción y principalmente decomisar sus activos, menguando sus recursos materiales y económicos de manera sistemática para afectar su economía, aumentar sus costos y reducir sus ganancias.

En este tenor, de la interpretación sistemática y teleológica de dicha reforma se pone de manifiesto la estrecha relación entre la extinción de dominio y la delincuencia organizada, así como de los delitos asociados a ésta, en razón de la necesidad de diseñar una política integral y establecer acciones específicas de prevención y combate de este tipo de delincuencia, por lo que, en ese sentido, debe tomarse en cuenta que conforme al artículo 73, fracción XXI, constitucional, la extinción de dominio está dentro del marco de acciones de carácter federal tendentes a combatir la delincuencia organizada y los delitos asociados a ésta, por lo que su regulación corresponde a la Federación, además de que no puede considerarse como una acción real de contenido patrimonial, razón por la cual las entidades federativas no pueden legislar al respecto como parte de la materia civil de su competencia, al ser una

acción motivada no por intereses patrimoniales, sino por intereses superiores del Estado. Preciso que el modelo colombiano fue un referente importante en la adopción de esta figura en nuestro país, la cual no se circunscribe a la órbita patrimonial del particular afectado con su ejercicio, sino que persigue un legítimo interés público por virtud de un régimen constitucional del derecho de propiedad.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales recordó que la acción de inconstitucionalidad 18/2010 se votó por mayoría de siete votos a favor y tres votos en contra.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del considerando quinto, relativo a la competencia de la Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza para legislar sobre extinción de dominio, la cual se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Pardo Rebolledo, Silva Meza y Medina Mora I. votaron en contra y por la incompetencia de las Legislaturas locales en materia de extinción de dominio.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo realizó la presentación del considerando sexto, relativo al estudio de fondo. El proyecto propone declarar fundado el concepto de invalidez, debido a que la extinción de dominio es de interpretación y aplicación restrictiva, como ordena el artículo 1º, párrafo segundo, constitucional, ya que fue regulada

como un caso de excepción al derecho de no confiscación de bienes consagrado en el artículo 22 constitucional, aunado a que el Constituyente señaló en su exposición de motivos que dicha extinción procedería estrictamente en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, no así a otro tipo de conductas pues, en caso contrario, se habría delegado en el legislador ordinario el determinar respecto de cuáles delitos podría proceder. Por último, se destaca que la acción de extinción de dominio está íntimamente vinculada con la materia penal, pues derivan de los mismos hechos y protegen los mismos bienes jurídicos, de manera que no resulta lógico que la interpretación del derecho penal esté conformada por principios limitadores del poder punitivo del Estado. Así, se propone declarar la invalidez del artículo impugnado.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó de acuerdo con la propuesta porque el artículo 22 constitucional señala cinco delitos respecto de los cuales procede la extinción de dominio, los cuales no comprenden la facilitación delictiva del artículo 280 Bis del Código Penal local, descrito como las personas que vigilan e informan sobre el movimiento de personas o de corporaciones de seguridad pública en cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

El señor Ministro Medina Mora I., obligado por el criterio mayoritario, compartió el sentido de las consideraciones de

la propuesta y sugirió, en primer lugar, que no debería tratarse del derecho fundamental a la no confiscación de bienes, sino del derecho de propiedad y la garantía de no confiscación de bienes, por lo que el argumento del Congreso del Estado de Coahuila resulta infundado, pues el principio de legalidad para las autoridades opera de forma distinta que para los particulares, en el sentido de que aquéllas no pueden no pueden hacer lo que no les está permitido por la ley y, en segundo lugar, deberían matizarse las afirmaciones concernientes a que la extinción de dominio en el derecho penal combate las conductas que atacan gravemente a la sociedad, protegiendo esencialmente los mismos bienes jurídicos y que parten del mismo objetivo: sancionar esas conductas.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo aceptó las sugerencias realizadas por el señor Ministro Medina Mora I. Aclaró que, obligado por el criterio mayoritario, votaría en favor del proyecto y de la declaración de invalidez, con salvedades en el tema de la competencia del órgano que expidió la norma.

El señor Ministro Silva Meza se pronunció de acuerdo con la propuesta, estimando que debería matizarse lo concerniente a la naturaleza de sanción de la extinción de dominio, pues no es esa la pretensión del Estado, sino que la comisión de delitos puede tener consecuencias patrimoniales, como una estrategia constitucionalmente diseñada.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea concordó con el señor Ministro Silva Meza en que el proyecto indica que se sanciona la comisión de ciertos delitos mediante la afectación al patrimonio del crimen organizado, tratando inclusive del principio *nullum crimen sine lege*, siendo que en la Primera Sala se ha distinguido con claridad la naturaleza de la extinción de dominio para separarla de la materia penal a pesar de estar relacionadas mediante el hecho ilícito, estimando que probablemente el proyecto se construyó después del precedente del Tribunal Pleno y antes de los precedentes de la Primera Sala aludidos.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo modificó el proyecto para declarar la invalidez del precepto impugnado exclusivamente por la razón de que el legislador de Coahuila agregó una hipótesis no prevista taxativamente en el artículo 22 constitucional para la extinción de dominio, eliminando el resto del estudio que se hace en abundancia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales se manifestó de acuerdo con el proyecto y su modificación, apartándose de lo respectivo a la figura de legislación secundaria de taxatividad, pues la extinción de dominio debe relacionarse directamente con la permisión establecida en el artículo 22 constitucional.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando sexto, relativo al estudio de fondo, la cual se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Luna

Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales apartándose del argumento de taxatividad. El señor Ministro Franco González Salas reservó su derecho de formular voto concurrente.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo realizó la presentación del considerando séptimo, relativo a los efectos. El proyecto propone que la invalidez decretada surta sus efectos a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, señaló que han existido casos en los que se determina que surta efectos la invalidez a partir de la notificación al Congreso del Estado en cuestión, por lo que estará a la decisión mayoritaria del Tribunal Pleno.

El señor Ministro Pérez Dayán consideró que, si el proyecto parte del principio de la interpretación más favorable y la manera de entender restrictivamente a la extinción de dominio, se deben dar efectos retroactivos a la sentencia condicionados a la publicación en el Diario Oficial, pues el artículo 22, fracción I, constitucional indica que el procedimiento de dicha extinción será jurisdiccional y autónomo del de la materia penal y, tomando en cuenta que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación entrega la competencia a los juzgados de distrito en materia civil en vía residual para conocer esas acciones a nivel federal, lo mismo que hacen las legislaciones de los Estados tratándose de la competencia local. Al respecto, el proyecto

enfatisa que si bien la Constitución expresa autonomía respecto de la materia penal, se guarda una relación ante la presencia de un delito, es decir, que para la procedencia de la extinción de dominio no se requiere la acreditación de circunstancias exigidas en el procedimiento penal, pero sí presupuestos fundamentales de ésta materia, refiriendo la propuesta además que la extinción de dominio no puede abstraerse de la rama penal al ser ésta la que describe los tipos penales que dan lugar a la acción respectiva. Apuntó que el artículo 1º, párrafo segundo, constitucional postula el principio de interpretación más favorable, por lo que, en atención a esta estrecha vinculación con la materia penal, los efectos de la resolución deberían ser retroactivos.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo recordó haber eliminado toda referencia a la materia penal a raíz de los comentarios de los señores Ministros Silva Meza y Zaldívar Lelo de Larrea, lo cual ya se votó. Consideró que la figura de extinción de dominio tiene su origen en una causa penal, pero no están estrechamente vinculados en cuanto a su trámite, desarrollo o resolución, dado que la Constitución lo prevé como un procedimiento autónomo e independiente de la causa penal que le dio origen, señalando que, en el tema de la competencia jurisdiccional, se han establecido juzgados especializados en extinción de dominio a nivel federal y se ha determinado que, de manera residual, conozcan de los asuntos los tribunales civiles. En ese contexto, estimó que no es dable el efecto retroactivo de la declaratoria de invalidez de esta sentencia.

La señora Ministra Luna Ramos coincidió con el señor Ministro ponente Pardo Rebolledo en que no es un problema de naturaleza estrictamente penal, aunque guarde cierta relación en el sentido de que atiende a ciertos delitos específicamente determinados en la Constitución, es decir, que el procedimiento de extinción de dominio es distinto y con una especialidad totalmente diferente. Aclaró que, con la declaración de invalidez del artículo impugnado y el delito con el que se relaciona, no hace falta imprimir efectos retroactivos a la sentencia porque no se podrá dar la confiscación de bienes por el delito en cuestión.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea indicó que, respecto de los efectos retroactivos que pudieran darse a la sentencia, reiteró que si bien la Primera Sala estableció una serie de jurisprudencias que determinan la autonomía e independencia de la extinción de dominio con relación al proceso penal, ello no implica una división tajante entre ambas; sin embargo, debe atenderse la lógica excepcional del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional y, dado que no se trata de la materia penal en sentido estricto, los efectos no deberían ser retroactivos, por lo que estaría en favor del proyecto.

El señor Ministro Franco González Salas se pronunció de acuerdo con el proyecto, en términos de lo comentado por los señores Ministros ponente Pardo Rebolledo, Luna Ramos y Zaldívar Lelo de Larrea, ya que el punto medular señalado por el propio Constituyente desde los trabajos

legislativos fue la distinción de la extinción de dominio como un procedimiento jurisdiccional autónomo de la materia penal, evidentemente vinculado a ciertos ilícitos penales para acreditar la causa que genera la materia del proyecto, así como por el objeto consistente en los bienes de origen ilícito, siendo que en el procedimiento, los particulares pueden acreditar la licitud de esos bienes. Por esas razones, estimó que al procedimiento no le son aplicables los principios del derecho penal, entre ellos, los efectos retroactivos de la sentencia, por lo que se expresó de acuerdo con el proyecto y algunas de sus argumentaciones.

El señor Ministro Pérez Dayán indicó que la axiología inmersa en los trabajos legislativos participa de un eje fundamental: la libertad de las personas, por la cual el precedente de la acción de inconstitucionalidad, que versó sobre la materia penal, declaró la invalidez de la norma entonces impugnada y determinó efectos retroactivos a la sentencia, siendo que si el proyecto modificado indica que el procedimiento de extinción de dominio depende de factores propios del proceso penal e involucra a un tercero al que se le afecta en su propiedad sin indemnización, existiría la razón suficiente para unir uno y otro proceso y, de esa manera, dar efectos retroactivos a la sentencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales concordó en que no se pueden dar efectos retroactivos a la sentencia en términos del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional porque,

aunque la extinción de dominio esté vinculada de cierta manera con la comisión de un delito, no es un delito en sí mismo ni se trata de la materia penal. Estimó que, una vez notificada esta sentencia, las autoridades correspondientes deberán interrumpir y dejar sin efectos los procedimientos de extinción de dominio que se estuvieran tramitando en relación con el delito de facilitación delictiva, incluso respecto de hechos realizados con anterioridad a la notificación de esta sentencia.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas puntualizó que, si bien la extinción de dominio tiene origen en un hecho delictivo, es un procedimiento autónomo de diversa naturaleza a la penal y, por tanto, los efectos de esta resolución no pueden ser retroactivos.

La señora Ministra Luna Ramos resaltó que, aunque no se den efectos retroactivos a la sentencia, los justiciables no quedan en estado de indefensión ante la sola declaración de inconstitucionalidad de la norma combatida, dado que ya se estableció un criterio de fondo por esta Suprema Corte, mismo que se podría hacer valer vía argumentos en el juicio correspondiente, además de que sería viable la causa de pedir y la suplencia de la queja.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea señaló que, de entrada, la extinción de dominio no pertenece a la materia penal por virtud de lo previsto en el artículo 22 constitucional, coincidiendo con el señor Ministro Medina Mora I. en que su finalidad es menoscabar las estructuras financieras de la

criminalidad para combatir la delincuencia, estimando que la Constitución cuidó no vincular fuertemente este procedimiento con la materia penal pues, de lo contrario, sería extraordinariamente complicado y perdería utilidad con los mismos requisitos provenientes de esa rama. Reiteró que la Primera Sala ha establecido jurisprudencia respecto de esta separación y que valdría la pena referirla en el proyecto.

El señor Ministro Franco González Salas se sumó a todo lo dicho en favor del proyecto. Distinguió que la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación implica que debe estar engrosada, por lo que toma más tiempo que la notificación de los puntos resolutivos al órgano legislativo que expidió la norma, por lo que consideró que esta segunda opción sería la más conveniente por los efectos importantes que recaerán sobre los bienes de las personas, independientemente de que posteriormente se publique la sentencia debidamente integrada en el Diario Oficial.

El señor Ministro ponente Pardo Rebolledo modificó el proyecto para determinar que la invalidez surta efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al órgano legislativo, por ser lo más práctico y ágil, sin perjuicio de que las razones y argumentos que sostienen dicha invalidez puedan conocerse una vez que se publique el engrose respectivo en el Diario Oficial de la Federación.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del considerando séptimo,

relativo a los efectos, la cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra y por la determinación de efectos retroactivos.

Dadas las votaciones alcanzadas, los puntos resolutiveos que deberán regir en el presente asunto deberán indicar:

“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 9, fracción V, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cuatro de octubre de dos mil trece, la cual surtirá sus efectos una vez que se notifiquen los puntos resolutiveos de esta sentencia al Congreso de esa entidad. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las trece horas con cinco minutos y reanudó la sesión a las trece horas con veintidós minutos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el asunto siguiente:

II. 20/2014 y Acción de inconstitucionalidad 20/2014 y acumulada
Ac. 21/2014 21/2014, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de los artículos 2, fracción IV, 4, párrafo primero, 5, fracción IV, inciso a), 62, fracción IV, y 63, párrafo segundo, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el trece de mayo de dos mil catorce. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: *“PRIMERO. Son procedentes y fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de la fracción IV del artículo 2, en la porción normativa que indica: “delincuencia organizada,”; del artículo 4, en la porción normativa que señala: “delincuencia organizada,”; de la fracción IV e inciso a) del artículo 5, en las porciones normativas que indican: “o de delincuencia organizada,” y “delincuencia organizada,” respectivamente; de la fracción IV del artículo 62 en la porción normativa que señala: “la intervención de la delincuencia organizada o”; y del segundo párrafo del artículo 63, en la porción normativa que señala: “la intervención de miembros de la delincuencia organizada o”, todos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial de la Entidad el trece de mayo de dos mil catorce, en los términos precisados en el apartado VI de la presente*

resolución. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

La señora Ministra Luna Ramos se hizo cargo de la ponencia del asunto y realizó su presentación. Propuso someter a la valoración del Tribunal Pleno los apartados procesales del proyecto.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II, III, IV y V relativos, respectivamente, al trámite, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra ponente Luna Ramos realizó la presentación del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos. El proyecto realiza un análisis de constitucionalidad en dos aspectos; el primero relacionado con el sistema de distribución competencial entre la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, retomando las razones de la acción de inconstitucionalidad 18/2010, en el sentido de que el Distrito Federal tenía competencia para legislar en materia de extinción de dominio

conforme al artículo 124 constitucional; y el segundo basado en la acción de inconstitucionalidad 21/2013 y la distribución competencial entre Federación, entidades federativas y el Distrito Federal, en el sentido de que la delincuencia organizada es una materia de competencia exclusiva del Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracción XXI, constitucional. En razón de estos argumentos, se propone la invalidez de la fracción IV del artículo 2, en la porción normativa que indica: “delincuencia organizada,”; del artículo 4, en la porción normativa que señala: “delincuencia organizada,”; de la fracción IV e inciso a) del artículo 5, en las porciones normativas que indican: “o de delincuencia organizada,” y “delincuencia organizada,” respectivamente; de la fracción IV del artículo 62 en la porción normativa que señala: “la intervención de la delincuencia organizada o”; y del segundo párrafo del artículo 63, en la porción normativa que señala: “la intervención de miembros de la delincuencia organizada o”, todos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la discusión en torno al apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su primera parte concerniente al sistema de distribución competencial entre la Federación y las entidades federativas en materia de extinción de dominio. Sugirió que se añadieran al engrose algunas consideraciones de la acción de inconstitucionalidad 33/2013 recién resuelta.

La señora Ministra ponente Luna Ramos modificó el proyecto con la sugerencia realizada.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su primera parte concerniente al sistema de distribución competencial entre la Federación y las entidades federativas en materia de extinción de dominio, la cual se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Pardo Rebolledo, Silva Meza y Medina Mora I. votaron en contra del proyecto. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente.

La señora Ministra Luna Ramos aclaró que se votó la primera parte relacionada con la competencia, lo que no se debería confundir con la segunda parte concerniente a la delincuencia organizada.

El señor Ministro Pérez Dayán indicó que la complejidad del proyecto radica en la división de las consideraciones, puesto que genera una diferencia de criterios respecto de si la extinción de dominio está o no dentro de la competencia de las entidades federativas, por lo que, dado que el Congreso expresó en su defensa que no legisló respecto de la delincuencia organizada, sino de la extinción de dominio, entonces tendría que resolverse primero si se trata de un tema de extinción de dominio o de

delincuencia organizada. Al respecto, refirió que la norma combatida sólo reproduce el texto constitucional, lo que supone que, de declararse inválida, la extinción de dominio sería competencia de los juzgados federales, dado que la delincuencia organiza es materia exclusiva de la Federación. Recalcó que si en la primera parte ya se validó una competencia para la extinción de dominio, no se podría pasar al análisis de la delincuencia organizada sin antes determinar si el Congreso legisló en materia de extinción de dominio o de delincuencia organizada. Adelantó que, de tratarse de una legislación en materia de delincuencia organizada, se genera la incompetencia del Congreso de utilizar esa expresión en la ley y, de ahí, su invalidez. En todo caso, consideró que el proyecto tendría que reestructurarse para determinar primeramente aquello que el Congreso no puede realizar y, a partir de ello, llegar a la consecuencia propuesta.

El señor Ministro Silva Meza precisó que, en el caso, el argumento toral de las accionantes de invalidez de los artículos impugnados es la referencia a la delincuencia organizada, respecto de lo cual el Congreso local carece de competencia, de acuerdo con el precedente de la acción de inconstitucionalidad 18/2010, lo que se diferencia del precedente de la acción de inconstitucionalidad 21/2013 que versó sobre la extinción de dominio.

La señora Ministra ponente Luna Ramos apuntó que en los argumentos de las accionantes involucraron cuestiones

de delincuencia organizada y de extinción de dominio, razón por la cual el proyecto toma en consideración los dos precedentes, cuyos criterios mayoritarios son, por una parte, que las Legislaturas locales sí pueden legislar en materia de extinción de dominio y, por otra parte, no tienen competencia para legislar respecto de la delincuencia organizada, ni siquiera mencionarla y, por ende, es que se declara la invalidez de las porciones normativas que refieren a la delincuencia organizada, sin involucrar el tema de extinción de dominio, ya que fue materia de la primera votación. En ese sentido sostuvo la propuesta del proyecto.

El señor Ministro Franco González Salas se pronunció de acuerdo con la propuesta porque coincide con el enfoque dado desde la demanda de la presente acción, en la cual se planteó la falta de competencia para la extinción de dominio y luego en cuanto a la delincuencia organizada, siendo eso lo que se resuelve en el proyecto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que anunció voto concurrente en la votación anterior al estimar que los artículos 62 y 63 impugnados se deben anular con base en la falta de atribuciones para legislar en materia de delincuencia organizada con base en lo sustentado en la acción de inconstitucionalidad 21/2013, pues dichos numerales no guardan relación con la extinción de dominio.

El señor Ministro Pardo Rebolledo estimó, asumiendo el criterio mayoritario, que el tema se salva con el precedente de la acción de inconstitucionalidad 18/2010

relativo a que la Asamblea Legislativa podría legislar respecto de la extinción de dominio prevista en el artículo 22 constitucional, siempre y cuando los procesos no se vincularan con la delincuencia organizada (de exclusiva competencia federal), sino con los delitos de robo de vehículos (al ser de competencia local), secuestro, trata de personas, narcomenudeo, trata de personas y secuestro (cuya regulación corresponde al Congreso de la Unión, con aplicación y operatividad por las autoridades locales de forma concurrente). Por eso, estaría conforme con el proyecto.

El señor Ministro Pérez Dayán hizo hincapié en que en la demanda no hay un planteamiento real en contra de la extinción de dominio, sino únicamente respecto de la delincuencia organizada, por lo que, lógicamente, sería suficiente con contestar el planteamiento de los accionantes para llegar al mismo resultado de los resolutivos, no así analizar oficiosamente la extinción de dominio para reconocer esa competencia como válida.

La señora Ministra ponente Luna Ramos adelantó que, de estar de acuerdo la mayoría, eliminaría el estudio de competencia relacionado con la extinción de dominio, pero subrayó que en los conceptos de invalidez, contenidos en la página tres del proyecto, se esgrimió el alusivo a que el artículo 22 de la Constitución no autoriza a las entidades federativas a legislar en relación con la extinción de dominio para los casos de delincuencia organizada y, por ese motivo,

el proyecto está dando contestación a dicho concepto de invalidez.

El señor Ministro Pardo Rebolledo estimó pertinente el análisis de la facultad para legislar sobre extinción de dominio, a pesar de que, como señaló el señor Ministro Pérez Dayán, no exista un argumento concreto al respecto, puesto que se vincula la delincuencia organizada dentro del contexto de la extinción de dominio, además de que se analiza una ley enfocada a esta última figura.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales convergió con lo dicho por el señor Ministro Pardo Rebolledo, ya que la extinción de dominio se vincula a una serie de delitos, entre ellos la delincuencia organizada, y si bien emitió algunas argumentaciones que le hacían dudar sobre la invalidez decretada en la acción de inconstitucionalidad 18/2010 en tanto que, en ese entonces, no se legisló sobre la delincuencia organizada, sino que se correlacionó con la extinción de dominio, adelantó que se adheriría al proyecto y su argumentación, la cual determina que el legislador local no puede referirse a la delincuencia organizada.

El señor Ministro Franco González Salas precisó que la invalidez no responde a menciones aisladas a la delincuencia organizada en la Ley de Extinción de Dominio que se estudia, sino que son referencias a la delincuencia organizada, respecto de las cuales las Legislaturas estatales no tienen competencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en su segunda parte concerniente al sistema de distribución competencial entre la Federación y las entidades federativas en materia de delincuencia organizada, la cual se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo obligado por la mayoría, Silva Meza obligado por la mayoría, Medina Mora I. obligado por la mayoría, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán con precisiones y Presidente Aguilar Morales.

La señora Ministra ponente Luna Ramos realizó la presentación del apartado VII, relativo a los efectos. Modificó el proyecto para ajustarlo al asunto anterior, esto es, para determinar que la invalidez surta efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al órgano legislativo, sin perjuicio de que las razones y argumentos que sostienen dicha invalidez puedan conocerse una vez que se publique el engrose respectivo en el Diario Oficial de la Federación.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sugirió que se ajustaran los puntos resolutivos en consecuencia.

La señora Ministra ponente Luna Ramos aceptó la sugerencia realizada.

El señor Ministro Pérez Dayán aclaró que votaría obligado por la mayoría.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado VII, relativo a los efectos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán obligado por la mayoría y Presidente Aguilar Morales.

Dadas las votaciones alcanzadas, los puntos resolutivos que rigen en el presente asunto son:

“PRIMERO. Son procedentes y fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de la fracción IV del artículo 2, en la porción normativa que indica: “delincuencia organizada,”; del artículo 4, en la porción normativa que señala: “delincuencia organizada,”; de la fracción IV e inciso a) del artículo 5, en las porciones normativas que indican: “o de delincuencia organizada,” y “delincuencia organizada,” respectivamente; de la fracción IV del artículo 62 en la porción normativa que señala: “la intervención de la delincuencia organizada o”; y del segundo párrafo del artículo 63, en la porción normativa que señala: “la intervención de miembros de la delincuencia organizada o”, todos de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial de la Entidad el trece de mayo de dos mil catorce, en

los términos precisados en el apartado VI de la presente resolución; declaración de invalidez que surtirá sus efectos una vez que se notifiquen los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de esa entidad. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con cincuenta y cinco minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el jueves catorce de mayo de dos mil quince, a las once horas.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

"En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos".

